

## **¿Prácticas corruptas o relaciones de patronazgo?**

### **Orden patrimonial y la naturaleza del sistema político en el Perú colonial durante el gobierno del virrey conde del Villar (1585-1590)**

L. Miguel Costa

El 2 de mayo de 1590 zarpa del puerto del Callao con rumbo de regreso a España don Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar, señor del Villardompardo, caballero de la Orden de Santiago, virrey del Perú, acompañado de su hijo, don Jerónimo de Torres y Portugal y un muy reducido número de familiares y sirvientes (Levillier 1921-1926, vol. 11: 306). El escenario y el ambiente resultaba considerablemente menos festivo de lo que había sucedido poco menos de cinco años atrás, el 21 de noviembre de 1585, día en que el conde del Villar entró en la ciudad de Lima acompañado por una corte de 64 personas, entre parientes, amigos, paisanos, sirvientes, en medio de vítores y halagos, en su calidad de recién nombrado virrey del Perú. Durante los casi cinco años de su presencia y accionar en este virreinato no solo generó polémica y malestar entre muchos grupos de la sociedad colonial peruana, sino que desató una crisis de autoridad política de grandes proporciones, dando a lugar a bandos en conflicto, enfrentamientos con y entre funcionarios e instituciones del más alto nivel del virreinato por temas de poder, y teniendo como punto más crítico su propia excomunión ocurrida en octubre de 1589 de manos de la Inquisición de Lima (Levillier 1921-1926, Vol. 11: 322).

Más allá de los sucesos relacionados a este hecho histórico, lleno de detalles y acusaciones escandalosas, recogidas de forma minuciosa en la numerosa correspondencia oficial de la época así como en las dos investigaciones llevadas a cabo en su momento, la más notable de ellas la visita de la Audiencia de Lima y del virrey conde del Villar que el rey Felipe II encarga al licenciado Alonso Fernández de Bonilla en octubre de 1588, los hechos en torno al gobierno del conde del Villar, séptimo virrey del Perú, representan una excelente y particular oportunidad para el estudio, análisis

y comprensión de las dinámicas de poder y prácticas políticas del sistema de gobierno que España estableció en América en las décadas inmediatamente posteriores a su llegada al continente.<sup>1</sup>

Los trabajos en torno al estudio del sistema político colonial español en América, y en particular el caso del virreinato peruano, forman parte de una amplia e importante tradición historiográfica que van desde las investigaciones clásicas que enfatizan la presentación y descripción detallada de instituciones y personalidades fundamentales en su funcionamiento, hasta aproximaciones más recientes que buscan entender la construcción de la realidad política fundamentalmente como el resultado del funcionamiento de dinámicas de poder flexibles y diversas entre los distintos grupos de población, que incluyen no solo aspectos legales e institucionales, sino también elementos ceremoniales/rituales, así como vínculos familiares y redes clientelares de poder, y en donde el Estado institucional pareciera ocupar un lugar secundario.<sup>2</sup> En las últimas décadas, nuevas preguntas han sido planteadas en relación a lo político en el mundo colonial, y el énfasis ha sido puesto en situaciones de crisis y tensiones de poder en las acciones llevadas a cabo por las autoridades coloniales, en un intento válido por entender estructuras, dinámicas políticas, perfiles y problemas propios de este modelo político y su posible relación con situaciones que aparecerán en los

1 La visita, casi en su totalidad, se encuentra en el Archivo General de Indias - Sevilla (AGI), fundamentalmente en la sección Justicia, 480-485; pero también en Lima, 1, 29, 32, 93, 108, 127, 129, 209, 217, 274, 318 y 570; Escribanía, 499A, 500A y 567A; y Quito, 9. En el caso de cartas y otros documentos, información valiosa relativa a este caso se halla en: Cartas de Cabildos hispanoamericanos. Audiencia de Lima; Colección de las memorias o relaciones que escribieron los virreyes del Perú; Encinas, Cedulario indiano; Hanke (1978-1980): *Los virreyes españoles en América*; Jiménez de la Espada (1985 [1965]): *Relaciones Geográficas de Indias*; Konetzke (1953): *Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica*; Levillier (1921-1926): *Gobernantes del Perú*; y Libros de Cabildos de Lima.

2 Entre los trabajos clásicos destacan: García de Valdeavellano (1982): *Curso de historia de las instituciones españolas*; García Gallo (1944): *Los orígenes de la administración territorial de las Indias*; Góngora (1951): *El Estado en el derecho indiano*; y Maravall (1986 [1972]): *Estado Moderno y mentalidad social*. Otros trabajos posteriores abrieron la puerta para nuevas preguntas en torno a la interacción entre autoridades y sociedad colonial, como: Burkholder/Chandler (1977): *From Impotence to Authority*; y Pietschmann (1980): *El Estado y su evolución*. Más recientemente, trabajos como los Cañeque (2004): *The King's Living Image*; Martin (1996): *Governance and Society in Colonial Mexico*; Andrien (1985): *Crisis and Decline: The Viceroyalty of Peru in the Seventeenth Century*; Latasa Vasallo (1997): *Administración virreinal en el Perú*; Torres Arancivia (2006): *Corte de virreyes* y Ramos (2012): *Identity, Ritual, and Power in Colonial Puebla* apuntan al estudio de otros aspectos, como los ceremoniales y relaciones entre grupos y clientes, como elementos importantes en la definición de la dinámica de poder colonial.

modelos políticos de siglos posteriores, puntualmente a partir del siglo xix en adelante. Un caso en cuestión ha sido la rica e interesante discusión que se viene dando desde hace ya un tiempo en torno al tema de la corrupción en el mundo colonial.<sup>3</sup>

Mi trabajo busca aportar a estas discusiones con la presentación del caso del gobierno conde del Villar en tanto reflejo de las dinámicas entre autoridad y poder en el Perú virreinal en una etapa temprana, correspondiente a la segunda mitad del siglo xvi, poniendo especial atención en cómo estas dinámicas se articulan siguiendo una lógica propia y relativa a su momento histórico, quedando de manifiesto inclusive en momentos de conflicto y enfrentamiento, y en comportamientos que hoy en día podríamos considerar como ilegales y corruptos, pero que vistos en su contexto cobran un significado diferente.

El punto de partida que propongo es el entendimiento de conceptos teóricos generales como poder, autoridad, jerarquía, institucionalidad y conflicto, incorporando definiciones y reflexiones propias de la sociología y ciencias políticas, para a partir de allí pasar al análisis del caso puntual, el gobierno del conde del Villar como virrey del Perú entre 1585 y 1590, y tratar de entender allí las complejidades y particularidades manifiestas en la crisis política que se ocasiona. Al mismo tiempo, me interesa ver las dinámicas propias de la sociedad colonial, las relaciones que se articulan entre los grupos sociales, las redes de vínculos, colaboraciones y alianzas tácitas y explícitas que se generan en espacios privados pero que marcan la pauta de funcionamiento de las esferas públicas. La historiografía latinoamericana colonial se muestra muy rica en estos temas, incorporando investigaciones sobre venta de oficios, la dinámica entre ley y accionar social, vínculos sociales, redes familiares de poder (parentelas), entre otros.<sup>4</sup>

3 La producción historiográfica sobre el fenómeno de la corrupción política y económica en el mundo colonial hispanoamericano incluye importantes trabajos como: Andrien (1984): "Corruption, Inefficiency, and Imperial Decline"; Pietschmann (1998): "Corrupción en las Indias españolas"; Holguín Callo (2002): *Poder, corrupción y tortura en el Perú de Felipe II*; Portocarrero (2005): *El Pacto Infame: Estudios sobre la corrupción en el Perú*; Quiroz (2013): *Historia de la corrupción en el Perú*; y Moreno Cebrián/Sala i Vila (2005): "Una aproximación a la corrupción política virreinal".

4 El énfasis ha sido puesto en los funcionarios reales y su interacción con los grupos coloniales de poder político y económico local, con trabajos notables por su solidez documental y análisis teórico. Para mayor información, ver los trabajos de Herzog (1995): *La administración como un fenómeno social: La justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750)*; de la Puente Brunke (2006): "Codicia y bien público: los ministros de la Audiencia en la Lima seiscentista"; Bertrand (2011): *Grandeza y miseria del oficio*.

Resulta de suma utilidad para mi trabajo el uso de categorías teóricas presentadas por Max Weber en su análisis sobre la organización y evolución de las sociedades humanas, ya que ellas ofrecen conceptos referenciales que permiten entender mejor la complejidad del sistema político hispano de los siglos xv y xvi, y su instalación en los Andes peruanos hacia la segunda mitad del siglo xvi. Weber propone que los modelos políticos propios de Europa occidental en los siglos posteriores a la caída de Roma pueden ser considerados como sistemas que se sustentan y legitiman a través criterios de autoridad tradicionales, en los cuales el poder se sustenta en “la santidad de ordenaciones y poderes de mando heredados de tiempos lejanos “desde tiempo inmemorial” (Weber 2005 [1922]: 753-754). La autoridad tradicional puede dar lugar a modelos políticos que van desde formas puras de dominación, como es la patriarcal (sumisión y obediencia ilimitada debido a una devoción personal), pasando por las formas feudales/señoriales, hasta llegar al llamado Estado patrimonial, en donde la autoridad reside en el rey (dinastía real), como resultado de alianzas y relaciones de patronazgo con la nobleza y otros sectores importantes de la sociedad, entre ellos la Iglesia (Weber 2005 [1922]: 710-711).

Mi interés se centra en este último modelo político tradicional, el Estado patrimonial, ya que en él el ejercicio del poder no solo se considera como un atributo personal, como propiedad de quien ejerce el poder monarca (típico de todo modelo tradicional), sino que va acompañado de la existencia de un aparato burocrático, con oficiales nombrados por el rey, quienes cumplen el rol de instrumento personal del monarca en sus funciones de gobierno, y a su vez repiten y perpetúan ese ejercicio del poder y la función de gobierno como algo personal, en la medida que el rey mismo les otorga jurisdicción amplia y poco delimitada en su calidad de burócratas de un Estado patrimonial:

La separación entre los asuntos públicos y los privados, entre patrimonio público y privado, y las atribuciones señoriales públicas y privadas de los funcionarios, se ha desarrollado sólo en cierto grado dentro del tipo arbitrario, pero ha desaparecido a medida que se difundía el sistema de prebendas y apropiaciones. [...] El ejercicio del poder es en primer lugar un derecho señorial personal del funcionario. Fuera de los límites fijados por la tradición sagrada, el funcionario decide también, lo mismo que el príncipe, de acuerdo con los casos, es decir, según su merced y albedrío personales. [...] Todo se

---

*Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos xvii y xviii*; Schwartz (1970): “Magistracy and Society in Colonial Brazil”.

basa entonces completamente en “consideraciones personales”, es decir, en la actitud asumida frente a los solicitantes concretos y frente a las circunstancias, censura, promesas y privilegios puramente personales. (Weber 2005 [1922]: 784-785)

Weber considera que los grandes imperios continentales europeos anteriores a la Edad Moderna, y aún en una etapa temprana dentro de ésta, presentan características claras de un Estado patrimonial, ya que se observa que el soberano construye un sistema de gobierno a la imagen de su poder doméstico, con una mayor complejidad y la incorporación de sirvientes que formarán una estructura burocrática regida por un criterio patrimonial, en donde si bien en muchos casos el nombramiento mismo de estas autoridades sigue un procedimiento que incluye criterios objetivos de selección (en el caso colonial hispanoamericano, por ejemplo, el rol del Consejo de Indias, y requisitos puntuales como el ser letrado para los oidores), y alusión a leyes y normas aprobadas por el mismo rey, en la decisión prima final la voluntad personal de la autoridad tradicional (rey), y dentro de ellas criterios de lealtad y vínculos personales y familiares. Existe un carácter casi racional en esta forma de poder político patrimonial, que sin embargo no deja de sustentarse en la tradición y el vínculo personal con el rey. Es más, en la medida que responde a la voluntad y vínculo personal con el gobernante, las instituciones y funcionarios que forman parte de ella carecen de nociones claras de jerarquía y jurisdicciones definidas, lo que lleva a constante conflicto y negociación entre las partes, quienes deben negociar sus espacios de poder, recurriendo constantemente y de forma directa a la figura del monarca en su calidad centro absoluto y único de la autoridad política (Weber 2005 [1922]: 211-212). Incluso la existencia de leyes solo tiene un peso político real, funcional y sobre todo legítimo dentro del Estado patrimonial si se presentan y son percibidas como manifestaciones del poder personal del rey, quien las crea y aplica, a veces de forma errática, como parte de su política de otorgar mercedes, establecer deberes y derechos, percibidos como parte de su ejercicio personal del poder, ya que “desde su punto de vista [el del rey] el servicio público se encontraba inscrito en la lógica personal del clientelismo, el mismo que también dominaba en las relaciones medievales de vasallaje. Honor, fidelidad y deber se encontraban vinculados a obligaciones morales de reciprocidad en favor de un patrón que tenía una posición de poder” (Génaux 2002 [2000]: 108). Sobre este particular, la propuesta teórica de Michael Mann permite

profundizar y ampliar la comprensión, en la medida que enfatiza de qué manera autoridad, entendida como monopolio exclusivo del monarca, y por otro lado la idea de poder, como algo asociado a las dinámicas propias de la sociedad o comunidad política, en donde el Estado interactúa como un grupo más entre muchos otros (Mann 1984: 111-112).<sup>5</sup>

En cuanto al perfil propio de este tipo de burocracia que el rey construye como instrumentos de autoridad y poder, las personas que ocupan una posición burocrática son considerados sirvientes personales del rey, y en su sentido dependen de su lealtad y sumisión para mantener dicha posición. El cargo que un oficial ocupa dentro en una burocracia patrimonial representa finalmente una manifestación pública de la relación privada que mantiene con el rey, y las remuneraciones otorgadas aparecen rodeadas de un lenguaje que alude al otorgamiento de regalos, mercedes, beneficios personales. Puntualmente, Weber habla que dentro del Estado patrimonial la prebenda aparece como forma de sostenimiento que la autoridad (señor, rey) otorga al servidor patrimonial, de forma constante, a manera de apropiación individual, reguladas por criterios establecidos por la propia tradición.<sup>6</sup> Aún más:

[...] el Estado patrimonial hace que toda la esfera de los favores otorgados por el soberano pueda convertirse en lugar de explotación para la formación de fortunas, y da vía libre –allí donde la subordinación a la tradición o a la estereotipación no imponen límites definidos– al enriquecimiento del soberano mismo, de sus funcionarios cortesanos, favoritos, gobernadores [...]. (Weber 2005 [1922]: 837)

Así como las categorías y conceptos weberianos anteriormente mencionados permiten tener más luces sobre la posible lógica en el funcionamiento de las dinámicas de poder en la España y sus dominios coloniales en América entre los siglos xv y xvi, mi trabajo busca entender el significado real de prácticas políticas conflictivas en el contexto de un modelo político que

5 En clara referencia crítica al énfasis que Weber ponía al rol del Estado y su monopolio no solo de la autoridad sino también del ejercicio del poder, Mann indica que “the state can be defined in terms of what it looks like, institutionally, or what it does, its functions. Predominant is a mixed, but largely institutional, view put forward originally by Weber” (Mann 1984: 188).

6 Weber 2005 [1922]: 188. El autor también habla de otras formas de sostenimiento, como los feudos, que son poderes políticos otorgados a través de contratos que generan derechos y obligaciones en ambas partes, orientado todo a formas militares y administrativas en la organización de un territorio. Ver también: Rheinstein 1969: 262.

sin duda difiere sustancialmente de la lógica de los sistemas que hoy en día funcionan en gran parte de los países occidentales (racionales/legales, para utilizar la terminología weberiana en un sentido amplio). Probablemente la corrupción es quizás uno de los temas de mayor importancia hoy en día, en tanto factor de crisis y gran amenaza en el funcionamiento de los modelos políticos en Europa como en América, entre otras regiones del mundo, de allí que resulte de vital importancia entender su evolución como concepto y la validez de su uso como categoría según el orden político que se desee estudiar. La definición contemporánea de corrupción en occidente alude a una situación en la que una autoridad pública, representando alguna instancia de gobierno, hace uso de su posición pública para beneficiarse o beneficiar a terceros de forma particular. En la medida que hoy en día, el sustento del funcionamiento de un Estado se basa en la clara diferenciación entre las esferas públicas (estatales) y privadas (personales), las prácticas corruptas atentan la integridad del ente político (Estado), causando crisis de funcionamiento y de legitimidad (Friedrich 2002 [2000]: 15-23). Un punto importante a mencionar es que la distinción entre las esferas públicas y privadas no siempre resultan claras en todas las sociedades y modelos políticos. Como hemos señalado anteriormente, en los modelos políticos organizados de acuerdo a formas de autoridad y legitimidad tradicionales lo que predomina es un manejo político en donde la autoridad ejerce el poder a título personal, y proyecta y transmite dicho accionar a las demás esferas de su aparato de poder (burocracia).

Puntualmente en el caso de la Europa de la temprana Edad Moderna, Jean-Claude Waquet plantea la existencia de la corrupción política como una práctica que busca reconciliar aspectos religiosos (tradicionales) y legales propios de una dinámica de poder en transformación. De acuerdo a ello, Waquet propone que la corrupción fue un elemento funcional en el aparato administrativo de esta época, ya que no solo benefició a aquellos grupos de burócratas que eran parte del aparato político y de gobierno, otorgándole beneficios económicos y de poder, sino que a su vez permitió el fortalecimiento del orden y dinámicas de poder dentro de la sociedad. Si bien la corrupción, por un lado, resultó perjudicial para la autoridad monárquica y su intención de ejercer el poder de forma monopólica, en muchos casos resultó un elemento que permitió más dinamismo en las dinámicas de poder en el modelo en su conjunto (Waquet 1991: 73-74).

En ese contexto, resulta importante incorporar como concepto de análisis el patronazgo, en tanto mecanismo de construcción y participación de

dinámicas de poder dentro de este orden político tradicional –patrimonial–, que refuerza el funcionamiento de un Estado en donde la autoridad y su desempeño se sustentaba en relaciones entre patrones y clientes, en donde lo personal y la inexistencia de una diferenciación entre esferas públicas y privadas definían el accionar de quienes ejercían el poder. En ellas, por ejemplo, las relaciones de paisanaje resultan importantísimas para posicionarse en los círculos de poder, tanto en la corte como en territorios alejados de ella. Al mismo tiempo, en territorios alejados del poder del monarca, aquellos individuos beneficiados bajo una relación clientelar con el monarca, debían repetir asimismo esas dinámicas clientelares con grupos de poder propios del nuevo territorio a donde hubieren llegado, de lo contrario el círculo clientelar podía romperse y entrar en crisis (Moreno Cebrián/Sala i Vila 2005: 90). Al final, las relaciones clientelares y de patronazgo dentro del modelo del Estado patrimonial permitían su funcionalidad y reforzaban la figura del monarca, percibido como el patrón por excelencia y único centro y fuente de poder y autoridad. Por su lado, los burócratas entendieron el ejercicio de sus funciones y autoridad como una merced personal recibida de la fuente de poder central y última (el rey), y de acuerdo a ello se desempeñaron en sus funciones como quien maneja sus asuntos personales. Las prácticas que hoy en día se dan en sistemas políticos legales y racionales y que caen dentro de la categoría de corrupción, en el contexto de la temprana Edad Moderna europea simplemente reflejaban las complejas relaciones clientelares y de patronazgo cuya funcionalidad hacía viable el modelo en cuestión. Los límites a este accionar personal eran sutiles, y tenían que ver con nociones de legitimidad tales como el ejercicio del poder replicando los círculos clientelares en torno a otros actores (muchas veces locales).

En el caso de España en la temprana Edad Moderna, puntualmente el reino de Castilla, el sistema político que tenía a la cabeza la figura de la monarquía se sustentaba en relaciones de poder y patronazgo con los diversos sectores de la sociedad hispana. El monarca representaba la unidad política de autoridad y gobierno y garantizaba diversos derechos y privilegios a los diversos grupos o estamentos que conformaban su reino, según su posición. Este proceso de consolidación de una autoridad política centralizada se había dado en la península en el contexto de la Guerra de Reconquista contra los árabes, entre los siglos VIII y XV, muy específicamente a partir del siglo XI en que el avance cristiano hacia el sur empezó a cobrar impulso. Como resultado propio de la contienda militar, la actividad guerrera



asumió un rol protagónico en la construcción del orden político y social, convirtiendo en nobles a quienes participaban de forma destacada en las batallas, otorgándoles como tal privilegios y derechos especiales. (García de Valdeavellano 1982: 317). Ya para el siglo XII los reyes de Castilla y León habían consolidado su autoridad política y control territorial en las zonas de frontera a través del otorgamiento de beneficios y privilegios en la administración de territorios y fortalezas a particulares, en calidad de señoríos. Estos señoríos incluían beneficios de inmunidad jurisdiccional, administración de justicia, apropiación del cobro de tributos y gabelas, nombramiento de autoridades y representación de la autoridad real en todo quehacer administrativo (MacKay 1977: 42).

Es así como los grupos de poder y autoridad ubicados en los territorios recién recuperados de los árabes se constituyen como una nobleza militar que sustentaba su autoridad en torno a criterios tradicionales de autoridad recibidas como merced del rey. En algunos casos estos señoríos devinieron en entidades políticas autónomas, en muchos otros simplemente consolidaron una tradición política señorial en torno a la figura del monarca de Castilla. En todos los casos, el señorío se convierte en una práctica generalizada en la península, en la que las relaciones clientelares patrimoniales se reproducen no solo entre el monarca y el señor que recibe la merced, sino entre éste y los habitantes de los territorios. No hay duda de que el señorío es una delegación jurisdiccional e inclusive territorial que hace la Corona en favor de un individuo, como parte de una estrategia por parte del Reino de Castilla y Aragón de construir una red de alianzas políticas sobre la cual consolidar y continuar la reconquista y repoblamiento de los nuevos territorios. Como parte de ello vemos el surgimiento de los señores castellanos como un grupo poderoso y favorecido con mercedes y heredamientos. Hacia el siglo XV, con el gobierno de Isabel de Castilla, la Corona evitará el otorgamiento de nuevos señoríos y repartimientos, en un gesto claro de tratar de recuperar poder, autoridad y presencia en las zonas de frontera, específicamente en Andalucía y los alrededores del reino nazarí de Granada, a través de una política de centralización del poder y autoridad en la Corona. El cuidado especial estuvo puesto en el tema jurisdiccional, guardando los reyes para sí esa dimensión de poder (Kamen 1991: 156).

Con el advenimiento de la dinastía de los Habsburgo, el proceso de centralización y consolidación de una monarquía nacional continuó, y la dinámica patrimonial permaneció en tanto el rey se consolidó como la figura de donde el poder, prestigio y autoridad emanaba hacia sus súbditos,

con quienes negociaba temas de poder y llegaba a acuerdos constantemente. El nuevo rol asumido por la burocracia patrimonial, hacia donde se derivó gran parte de los sectores nobles y señoriales que habían sufrido recortes en algunas de sus jurisdicciones, no cambió de forma inmediata ni absoluta la percepción que los nombramientos para puestos oficiales y los beneficios que se desprendían de ellos eran finalmente producto de una relación o vínculo personal con el rey, y sostenida en tanto eso. Es ese contexto que el modelo de gobierno castellano se establece en las colonias americanas, combinando principios propios de una autoridad tradicional y legal: el funcionamiento del aparato burocrático se sustentaba en los privilegios otorgados por el rey a sus burócratas, teniendo como escenario la aprobación de decretos y normas paternalistas muy detallistas que buscaban regular el accionar de las instituciones y burócratas instalados en las colonias. La Corona de Castilla buscaba así evitar cualquier intento de cuestionamiento a su autoridad en los territorios americanos, pero al mismo tiempo usaba un lenguaje que dejaba entrever una relación personal hacia las autoridades nombradas, quienes finalmente eran legítimas autoridades debido a las mercedes personales recibidas del monarca (Sarfatti 1966: 25). La construcción de un orden institucional en América tomó gran parte de la primera mitad del siglo XVI. La firma de capitulaciones en la época de exploración y conquista muy pronto fue seguida por el nombramiento de adelantados y gobernadores. En el camino la fundación de ciudades, el funcionamiento de cabildos, el otorgamiento de encomiendas con jurisdicción y gobierno sobre grupos de indígenas, y el establecimiento de audiencias como órganos de administración de justicia marcaron esta época inicial en donde, nuevamente, estructuras burocráticas e institucionales combinaban prácticas modernas, al mismo tiempo que perpetuaban comportamientos patrimoniales en el ejercicio del poder (Góngora 1951: 87). Hacia la década de 1530 el andamiaje virreinal quedó establecido en los territorios más importantes para los intereses de la Corona, México y Perú, bajo un perfil claramente burocrático, institucional, pero con espacio a dinámicas clientelares y de patronazgo, no solo entre el rey y las altas jerarquías del poder virreinal (particularmente el virrey), sino también en las redes de poder construidas en los propios territorios coloniales:

[...] los virreyes encontraron que su poder se hallaba limitado debido a los derechos y libertades de los diferentes cuerpos sociales. In Nueva España, la autonomía de la autoridad eclesiástica probablemente constituía la limitación más grande al poder virreinal, aunque los odores también representaban un

control a las tendencias absolutistas de los virreyes. Hasta el cabildo de la Ciudad de México tenía suficiente poder para frenar, de considerarlo necesario, las pretensiones de quienes eran la viva imagen del rey. (Góngora 1951: 87)

Encontramos entonces un escenario complejo en América: un orden colonial sustentado en una estructura burocrática que más allá de aspectos modernos, contenía en relación con el monarca, y entre ellas mismas, una dinámica clientelar y de patronazgo que legitimaba la autoridad y poder de los funcionarios reales; autoridades e instituciones como el virrey, la audiencia, el cabildo, y la Iglesia (fortalecida en el contexto del Real Patronato, ya sea bajo la forma de obispados y arzobispados, o a partir de 1570 el propio Tribunal de la Santa Inquisición instalado en México y el Perú) interactuando en lo que Frederick Pike ha catalogado una política de “checks and balances” (Pike 1958: 152-154), especialmente beneficiosa para la política de control del rey; y un escenario ceremonial y ritual que hacía visual el ejercicio de poder de acuerdo a criterios tradicionales de legitimación.

Así, las prácticas clientelares y de patronazgo involucraron y vincularon a las distintas instituciones y autoridades en el escenario colonial hispano, tanto en el ejercicio real del poder como en el plano ceremonial. La Corona española imponía así un sistema político en el que el virrey otorgaba beneficios y privilegios en su calidad de representante del rey, y en un claro despliegue patrimonialista, pero pese a ello sus acciones se veían controladas y limitadas por la presencia de un conjunto de autoridades que, al igual que el virrey, sostenían su legitimidad en un vínculo directo y personal con el rey, en lo que podría ser considerado la forma pura e inicial del vínculo clientelar colonial.

En el caso específico de los virreyes, una vez llegados al territorio colonial repetían conductas de patronazgo propias a la figura del monarca y construían redes clientelares con grupos y autoridades locales, como una forma de asegurar lealtades y fortalecer su autoridad. Siendo la autoridad nominal más importante en su virreinato, en su calidad de representante del rey, se percibían a sí mismos como la fuente principal de poder clientelar en el Nuevo Mundo, y como tal otorgaban mercedes y colocaban en puestos claves y de prestigio en la administración colonial a gente de su entera confianza y cercana a ellos. De acuerdo a eso, mercedes y nombramientos en puestos públicos fueron las formas más comunes del sistema de patronazgo colonial. Ese mecanismo era controlado y ejercido por los

propios virreyes, y recreaban en sí mismos la propia naturaleza de prácticas clientelares y de patronazgo propias de un Estado patrimonial.<sup>7</sup>

El significado de los hechos en torno al gobierno de don Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar, como virrey del Perú entre noviembre de 1585 y mayo de 1590 debe ser estudiado y analizado en el contexto de esta dinámica política y social propia de la España de la temprana Edad Moderna, o primera modernidad. Proveniente de una familia prestigiosa, cuya estirpe data desde mediados del siglo XII, en plena campaña de Reconquista llevada a cabo por el reino de Castilla en los territorios de Andalucía, el otorgamiento que recibieran en la segunda mitad del siglo XIV del señorío del Villardompardo, perteneciente al reino de Jaén, marcó el inicio de su status privilegiado como parte de las familias y grupos de poder que formaban parte de las redes políticas clientelares y de patronazgo en torno a los reyes de Castilla. Don Pedro Ruíz de Torres, primer señor del Villardompardo, proclamado como tal en el año de 1371, obtuvo reconocimiento por apoyar a don Enrique (futuro Enrique II de Castilla) en las disputas dinásticas con su hermano don Pedro. La merced y señorío otorgado a don Pedro claramente estipulaba el privilegio de almocatrada, “que era cierto derecho y renta sobre los tenderos, Traperos, Especieros, revendedores, esparteros, herreros, Zapateros, y todas las otras tiendas de vender pan, azeite & c. conforme las llevaban y pertenecían á los Reyes” (Martínez de Mazas 1978 [1794]: 91-92). El éxito de esta merced fue consolidado a través de alianzas y matrimonios. Hacia 1396 la familia Torres aseguró la continuidad en la posesión del señorío a través de la creación del mayorazgo del Villar Don Pardo, y en 1418 y 1457 reciben mercedes reales que añadían las villas de Escañuela y Villargordo a su señorío. Ya en el siglo XVI don Fernando de Torres y Portugal representaba el éxito y prestigio típico de un personaje señorial, partícipe de una fuerte alianza clientelar y de patronazgo con la Corona de los Habsburgo. Como tal, y en reconocimiento también a sus funciones dentro de la burocracia real, Felipe II lo nombrará en 1576 primer conde del Villardompardo (Méndez Silva 1646: f. 4-4v).

7 Puntualmente para el caso de la figura del virrey y el entorno de clientelismo y patronazgo que se construye en el mundo colonial teniéndolo como eje de acción, el trabajo de Christoph Rosenmüller (2008) *Patrons, Partisans, and Palace Intrigues. The Court Society of Colonial Mexico, 1702-1710*, ofrece un análisis fino y exhaustivo en relación al gobierno de Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, virrey de Nueva España, y cómo malas prácticas burocráticas y vínculos con los intereses locales terminan socavando la presencia y autoridad de la Corona española en dicho virreinato.

La actividad política y económica de los Torres y Portugal estuvo marcada por una presencia constante en las esferas del poder cortesano castellano, pero al mismo tiempo por una presencia constante en la administración y usufructo de los derechos señoriales otorgados en el Villardompardo. El propio Fernando de Torres y Portugal, una vez asumido el señorío del Villardompardo en 1524, de inmediato retomó y participó en largas y tediosas disputas con grupos urbanos y económicos rurales que cuestionaban las jurisdicciones y prerrogativas en manos del señorío, y frente a los cuales don Fernando llevó a cabo una fuerte y cerrada defensa. De forma continua, don Fernando llevó a cabo litigios en la Chancillería de Granada contra los gremios oficiales y menestrales de la ciudad de Jaén por jurisdicciones de sol y viento, inicialmente exitosas (1541, 1549), pero posteriormente sin éxito (1564, 1568, 1572, 1582, 1584, 1586 y 1592) (Molina Martínez 1983: 46-53). Lo que estaba en juego no solo eran mercedes y beneficios económicos, sino también el propio concepto de orden poder y autoridad tradicional que los señores no estaban dispuestos a dejar ir fácilmente. El señorío de los Torres y Portugal no era el único que para ella época empezaba a sentir los vientos de cambio político y nuevas dinámicas de poder:

El deseo de los grupos nobles de introducir en la economía de la segunda mitad del siglo xvi elementos típicamente medievales revela con claridad la coexistencia de una clase social que aún vive y piensa bajo esquemas señoriales y unas formas económicas que van rompiendo con el pasado para adaptarse a la nueva realidad nacional. Si bien es cierto que un sector de la nobleza supo asimilar el cambio, incluso participar en él —es el caso de aquellos que abrazaron el gran comercio a raíz de la empresa americana— también lo es que otro sector pretendió beneficiarse de los nuevos tiempos aumentando las imposiciones sobre las actividades que florecían al abrigo de una situación general en alza [...]. (Molina Martínez 1983: 48)

Al mismo tiempo que daba batalla por la continuidad y respeto de sus mercedes, fueros y jurisdicciones señoriales que databan del siglo xiv (1371), sin éxito desde la década de 1560, el señor del Villardompardo, futuro conde del Villar y virrey del Perú, empezó una carrera como burócrata de la Corona de Castilla, ocupando puestos políticos y administrativos como representante del rey. Era clara la actitud de la Corona por recuperar y consolidar su poder político sobre grupos de poder (nobleza pero también cabildos y otros fueros civiles), sobre los cuales había tenido una política laxa los siglos anteriores, en el contexto de la Guerra de Reconquista. El

nombramiento de asistentes (corregidores) en las ciudades más importantes de Castilla justamente respondía a esa nueva actitud de la Corona, en la medida que imponía la presencia monárquica en temas administrativos, de justicia y de gobierno normalmente manejados por los cabildos (Kamen 1991: 23-26). Fernando de Torres y Portugal empezó su carrera burocrática en 1565, siendo nombrado corregidor de Salamanca, para muchos años después ser nombrado asistente de la ciudad de Sevilla, un puesto administrativo de notable importancia de la época, dado el rol de la ciudad dentro de la estructura económica y de poder establecida en relación a los dominios americanos (Domínguez de Ortiz 1946: 207). Además, en el particular caso de Sevilla, el asistente ostentaba una doble función, no solo como representante de la Corona, sino también como autoridad máxima del cabildo. Sus funciones involucraban aspectos de gobierno, judiciales y legislativos, y como tal era necesario para el cargo alguien de confianza y ajeno a la ciudad (sin conexiones allí):

[el Asistente] era Presidente nato del cabildo y estaba obligado a visitar en unión de los Alcaldes mayores, la tierra de la ciudad; tenía facultad para nombrar Teniente, el cual no podía asistir más de una vez en un pleito o negocio. Conservaba en su poder una de las llaves del arca de la Cuadra, donde estaban los votos de los Alcaldes Mayores. (Montoto 2001: 39)

El puesto era polémico y producía mucha oposición entre los grupos de poder y autoridades de la ciudad de Sevilla. De hecho la Revuelta de los Comuneros de 1520 incluía entre sus protestas la existencia de asistentes en las ciudades, debido a su accionar que limitaba el poder de las autoridades locales, y el alto sueldo que se les pagaba con dinero proveniente de las arcas de la ciudad (Kamen 1991: 26). El nombramiento de Fernando de Torres y Portugal como asistente en Sevilla era resultado de una carrera burocrática exitosa por méritos propios, pero también por su vínculo clientelar con figuras poderosas como el cardenal Diego de Espinosa (presidente del Consejo de Castilla entre 1565-1572) y Mateo Vázquez de Leca (secretario de Diego de Espinoza y posteriormente secretario real de Felipe II desde 1573) (Hampe Martínez 1992: 19).

La experiencia como asistente de Salamanca y posteriormente Sevilla (1578-1583) resultó muy beneficiosa para Torres y Portugal. Aprendió la administración de asuntos económicos asociados al cobro de impuestos como el almojarifazgo; el control de revueltas internas (puntualmente los moriscos de la ciudad); el manejo de plagas y epidemias; la organización

militar en torno a la movilización de tropas de apoyo al rey de Portugal. Al mismo tiempo lo expuso a las dificultades y enfrentamientos directos con instituciones como el cabildo, la inquisición y la Real Audiencia de Sevilla. La disputa con la audiencia fue especialmente tortuosa, ya que Torres y Portugal se sentía impotente frente al hecho de no tener ninguna autoridad ni jurisdicción sobre la audiencia, y por lo tanto hallarse constantemente subordinado a ella en sus funciones de justicia. Su frustración fue clara, así como su empeño de imponer su presencia como autoridad, en beneficio del poder real: “nuestro Señor ha sido servido y Su Magestad y los regidores de la dicha ciudad [Sevilla] recibido beneficio, no obstante la poca ayuda que a tenido de la Audiencia”.<sup>8</sup> Por otro lado, el conflicto con el cabildo de Sevilla también resultó considerable, ya que el cabildo percibía que sus fueros habían sido reducidos en favor del asistente, quien veía así reforzada su autoridad como representante directo del rey (Morales Padrón 1989: 212).

La experiencia y buen desempeño de Torres y Portugal como asistente en Sevilla fue un factor importante para su nombramiento como virrey del Perú. Las semejanzas en las funciones de asistente en la península ibérica y de virrey en el Nuevo Mundo parecían justificar el hecho común de muchos asistentes siendo luego nombrados virreyes tanto de Perú como Nueva España en los siglos XVI y XVII. En ambos casos se trata de personajes pertenecientes a la gran nobleza española, es decir, herederos del poder tradicional señorial ahora asimilados al orden clientelar y de patronazgo en función a la autoridad del rey. Además, su función como autoridades se sustentaba en una relación personal y directa con el monarca, cuyo poder y prerrogativas ellos representaban.<sup>9</sup>

Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar y señor del Villardompardo fue nombrado virrey del Perú por Felipe II el 31 de marzo de 1584, luego de meses de negociaciones y coordinaciones entre el rey el Consejo de Indias. El rey específicamente propuso y apoyó desde un inicio la candidatura del conde del Villar para el cargo, destacando su excelente desempeño como asistente en Sevilla, y pese a la insistente oposición del

<sup>8</sup> BNM, Manuscrito 9372, f. 160.

<sup>9</sup> Hampe Martínez 1992: 16. El autor menciona los casos de numerosos asistentes de Sevilla que luego se convirtieron virreyes de Nueva España y el Perú: Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de Coruña, virrey de México (1580-1583); Juan de Mendoza y Luna, III marqués de Montesclaros, virrey de Nueva España (1603-1607) y del Perú (1607-1615); Diego Pimentel, marqués de Gelves, virrey de Nueva España (1621-1625); García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, virrey de Nueva España (1642-1647) y del Perú (1648-1655).

Consejo de Indias, aduciendo su avanzada edad, inicia los contactos para su nombramiento. Sin embargo, por un tema de premura en la ocupación del cargo, el conde del Villar no acepta, y es nombrado en su lugar Lorenzo Suárez de Mendoza, a la sazón virrey de Nueva España. La muerte abrupta de Suárez de Mendoza abre nuevamente la posibilidad de la candidatura de Torres y Portugal, y su nombramiento se oficializa (Levillier 1921-1926, vol. 10: 14-32).

Muy rápidamente se proceden con los trámites de rigor, emisión de títulos, aprobación de decretos reales, envío de certificados reales a las provincias que componían el virreinato del Perú, así como el envío al recién nombrado virrey de una lista de cincuenta instrucciones sobre cómo gobernar el Perú. El rey fue muy explícito en mencionar la necesidad de tener especial cuidado con las autoridades civiles y religiosas instaladas en el Perú, las cuales constantemente buscan interferir en temas que solo atañen al gobierno del rey. Felipe II va más allá e instruye al conde del Villar que de ser necesario castigue a dichas autoridades, sin importar la autoridad que representan, ya que su intromisión en asuntos del rey no puede ser tolerado (Levillier 1921-1926, Vol. 10: 14-32). Del mismo modo, el monarca pone sobre aviso al virrey en cuanto a la presencia de familiares y gente cercana a su entorno que pudieran acompañarle en su viaje al Perú:

Y la misma advertencia y aviso haveys de tener en no dar a vuestros parientes allegados ni criados cossa alguna de los aprovechamientos officios ni salarios ni entretenimientos de la tierra porque por experiencia se ha visto los inconvenientes que de lo contrario an resultado de mas de ser contra lo que por mi esta proveydo. (Levillier 1921-1926, Vol. 10: 30)

Este mensaje claro por parte del rey obtiene inmediata respuesta por parte del conde del Villar, quien no solo menciona que viajará al Perú sin su esposa, pero que pide se le autorice llevar consigo al Perú a su hijo Jerónimo de Torres y Portugal, de 18 años, “por no yr tan solo, y sin persona a quien volver los ojos en lo que se me podría offreser”.<sup>10</sup> Asimismo, y como un acto quizás común en la época, pero quizás también representativo de cómo lo político y público también involucraba aspectos más personales y privados, Torres y Portugal solicita al rey le de autorización para hospedarse en los Reales Alcázares de Sevilla, a lo que Felipe II accede.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> AGI, Indiferente, 740, N. 271, L. 2, f. 1.

<sup>11</sup> AGI, Indiferente, 740, N. 271, L. 2, f. 1.



El 21 de noviembre de 1585 Fernando de Torres y Portugal entra en Lima bajo palio, en su calidad de virrey del Perú. Le acompañan no solo su hijo Jerónimo, sino también su sobrino Diego de Portugal, además de 62 personas, entre familiares y paisanos que formaban su corte. En total 64 personas sin contar al virrey, de las cuales 41 de ellos (64 %) eran andaluces, y puntualmente 28 (44 %) de Jaén.<sup>12</sup>

De inmediato, su actitud fue la de asumir el control en la administración del territorio virreinal a su cargo, sin admitir otra competencia que la suya. En una carta dirigida al rey el 5 de mayo de 1586, seis meses después de su arribo a Lima, el virrey conde del Villar critica abiertamente a los oidores y las visitas de inspección que llevan a cabo, cuestiona el desempeño de los corregidores nombrados a esa fecha, en especial a los de Potosí y Cuzco, e inclusive menciona que las personas que le han acompañado a Lima como parte de su corte podrían hacer un mejor trabajo en esos cargos: “y aunque alguno de mis criados y personas que vinieron conmigo tengo satisfacción que se les pudieran confiar corregimientos, no proveeré a ninguno de ellos. Guardaré puntualmente acerca de esto lo que S.M. me tiene mandado” (Hanke 1978-1980: 193).

A lo largo de 1586 Torres y Portugal, en su calidad de virrey del Perú, actuó en lo que él consideraba fundamental para el funcionamiento ordenado del gobierno del virreinato. Interviene el cabildo de Lima posponiendo por un año la elección de alcaldes ordinarios y juez de agua, nombrando en su lugar a Francisco de Quiñónez como corregidor de la ciudad. Esta medida desató una ola de protestas entre los vecinos, por lo que implicaba en cuanto a la vulneración de sus fueros y jurisdicciones, y por la imposición de una autoridad, el corregidor, nunca antes presente en la ciudad (Libros de Cabildos de Lima 1942, vol. 10: 274). En la segunda mitad del año lleva a cabo reformas a nivel de los corregimientos, unificando y reduciendo su número, y disminuyendo sus sueldos en mil pesos (Levillier 1921-1926, vol. 10: 225). En cuanto a su relación con las audiencias, hizo un análisis exhaustivo de los nombramientos hechos por la Audiencia de Lima durante los años de vacancia de virrey, cancelando muchos de ellos; inició una investigación en contra del licenciado Cañaveral, presidente de la Audiencia de Quito; y deslegitimó las funciones de la Audiencia de

<sup>12</sup> AGI, Contratación, 725, N. 32, ff. 10-13; Contratación, 5229, R. 1-43; y Contratación, 5229, N. 6, R. 22.

Charcas en relación a la administración de los asuntos relativos a Potosí (Hanke 1978-1980: 193-195).

Paralelo a este accionar, el nuevo virrey construye su red patrimonial y ya para inicios de 1586 ha nombrado a miembros de su corte y entorno personal en puestos cercanos a la autoridad y accionar del virrey. Jerónimo de Torres y Portugal, su hijo de 18 años, ostentaba en 1586 los cargos de general de Infantería, capitán de Caballería de Lima y Callao, teniente de capitán general de Mar y Tierra, y veedor real del envío de plata a Tierra Firme (Levillier 1921-1926, vol. 10: 105, 139, 205). Diego de Portugal, su sobrino de 26 años, fue nombrado capitán de la Guardia Personal del virrey y miembro de la Compañía de Lanzas.<sup>13</sup> Juan Bello, su asistente personal desde sus épocas en Sevilla, de 26 años, recibe el puesto de Secretario de Gobierno y miembro de la Compañía de Lanzas.<sup>14</sup> Estos tres personajes representan el núcleo cercano al virrey, pero no son los únicos en recibir puestos y mercedes. En los meses y años siguientes a su llegada a Lima, el conde del Villar lleva a cabo una política de otorgar beneficios a los miembros de su corte, con pleno conocimiento del propio rey (Encinas 1945 [1596], vol. 4: 4).

Además de estos lazos de clientelismo y patronazgo con el grupo de personas que llegaron con él al Perú, el virrey conde del Villar desarrolló relaciones patrón-clientes con familias locales, otorgando puestos oficiales y mercedes a personas allegadas a los oidores, funcionarios de la audiencia e inclusive del propio arzobispo de Lima Toribio de Mogrovejo. Los roces iniciales debido a la acción impetuosa del virrey en relación a las autoridades que formaban parte de la estructura colonial del poder parecían de alguna manera haber quedado en el pasado. De hecho el conde del Villar contaba con un grupo de personalidades importantes del entorno local limeño muy cerca suyo, tal es el caso de Francisco de Quiñónez, prestigioso oficial del ejército y futuro corregidor de Lima; el doctor Alberto Acuña, abogado de la Audiencia de Lima; el doctor Pedro Muñiz, archidiácono de la Catedral del Cuzco; el doctor Pedro Esteban Maraón, juez de la división criminal de la Audiencia de Lima; y fray Pedro de Molina, prestigioso sacerdote de la orden de San Francisco.<sup>15</sup>

13 AGI, Justicia, 481, L. 1, pieza 1, ff. 2064v, 10553v-10556.

14 AGI, Justicia, 481, L. 1, pieza 1, ff. 10553v-10556.

15 AGI, Justicia, 480, L. 1, ff. 126-562; AGI, Justicia, 481, L. 1, ff. 20602-20612; AGI, Justicia, 485, L. 6, ff. 1-30v. Entre los ejemplos más resaltantes se tiene a Francisco Quiñónez, cuñado del arzobispo de Lima Toribio de Morgovejo, nombrado corregidor

Este aparente manejo eficiente y tradicional de construir círculos clientelares en donde participan personas tanto de su entorno como de las familias poderosas locales, y que le permitió sortear con relativo éxito las diversas crisis administrativas ocurridas durante su gobierno, como la incursión de piratas en las costas peruanas entre 1586-1587, la reconstrucción de la ciudad de Lima tras el terremoto del 9 de julio de 1586, y la severa epidemia de viruela y sarampión de 1589, no estuvo sin embargo libre de situaciones de conflicto. A las constantes quejas por las malas formas públicas del virrey, tanto en los momentos de dar audiencia en corte a los diferentes solicitantes, así como su accionar insultante en la dinámica de protocolo, especialmente en relación a miembros de la audiencia de Lima, siguió muy rápidamente un conflicto serio con el Tribunal de la Santa Inquisición en Lima.

Constituida como una de las instituciones más poderosas del orden monárquico español en la península ibérica y en América debido a jurisdicción plena en relación a temas religiosos, y su pertenencia burocrática como uno de los brazos del poder monárquico, la Inquisición representó desde su establecimiento en el Perú en 1569 y México en 1570 un elemento de conflicto en su relación con el resto de las instituciones y autoridades que formaban la estructura de poder colonial, inclusive la figura del virrey.<sup>16</sup> En el caso particular de Lima, debido a la gran distancia con Madrid, contaba con gran libertad de acción independiente en procedimientos administrativos y judiciales, inmunidad a procesamientos fiscales reales y civiles, así como beneficios tales como el derecho a portar armas, exención en el pago de ciertos impuestos, entre otros. Como grupo, los miembros de la Inquisición se constituyeron como una autoridad poderosa y amenazante, y a partir de ello lograron tomar ventajas tanto en temas económicos como de impunidad legal (Escandell y Bonet 1980: 450).

A la llegada del virrey conde del Villar al Perú en 1585, la Inquisición en Lima estaba bastante bien consolidada en torno a la figura del licenciado Antonio Gutiérrez de Ulloa, inquisidor de Lima, presente en

---

de Lima; Diego Bravo, cuñado del más antiguo oidor de Lima Cristóbal Ramírez de Cartagena, nombrado corregidor de Porco; María Contreras, suegra del oidor de Charcas, licenciado Jerónimo de Calderón, recibió indios para su servicio personal.

16 AGI, Lima, 29, f. s/n. El virrey Toledo envía una carta a Felipe II en 1573, en donde anuncia que ha puesto de su parte para que la Inquisición se establezca y funcione en el Perú, pero teme que su presencia genere conflictos graves con otras autoridades, los mismos que solo podrían ser evitados si el rey toma cuidado y evita que se inmiscuya en asuntos fuera de su competencia.

el puesto de la ciudad desde 1571, casi desde la llegada misma de esta institución al Perú. El punto de partida del conflicto y rivalidad entre el virrey y la inquisición se remonta a mayo de 1586, seis meses después de la llegada del virrey al Perú, y se da en torno a temas más bien cercanos a la práctica clientelar y de patronazgo. Como parte de su política de reorganizar el funcionamiento del virreinato, Torres y Portugal pone especial atención al tema fiscal, puntualmente al estado de producción de las minas de mercurio de Huancavelica. El virrey escribe una carta a Felipe II el 25 de mayo de 1586 indicando la situación conflictiva en Huancavelica, en donde la Corona ha otorgado licencia de explotación a un particular llamado Amador de Cabrera, quien ha entrado en conflicto con un grupo de inversionistas cercanos a él, con el consiguiente peligro de retrasar la producción de mercurio. El virrey sugiere al rey que recupere el control directo sobre Huancavelica, en especial sobre su mina más importante llamada La Descubridora, que estaba en manos de Cabrera, para así poner fin a la crisis. Torres y Portugal descubre en el proceso de acciones que el yerno de Amador de Cabrera es Juan Gutiérrez de Ulloa, Alguacil Mayor de la Inquisición de Huancavelica y hermano del Inquisidor de Lima Juan Gutiérrez de Ulloa. La posibilidad de conflicto era demasiado evidente como para no ser percibida, y el conde del Villar lo indica:

[...] como de cosa que toca al Inquisidor yo lo entiendo hazer con cuidado y espero acabarlo mediante nuestro señor y aunque el fiscal ha scripto a V. magd. Según he visto por una copia de sus cartas que me ha mostrado que se podrá hazer sin costar nada a V. magd. Es imposible y dielo porque tomando la dicha mina de los dichos mineros se contentaran con que se les presten dineros para pagar al dicho amador de Cabrera lo que le deven [...].<sup>17</sup>

El escenario resultaba claro. El virrey buscaba imponer su criterio y autoridad sobre el tema, y Amador de Cabrera, a través de Gutiérrez de Ulloa y la fuerza de la Inquisición, buscaba llegada y comunicación directa con el rey, con el fin de desvirtuar las afirmaciones del virrey. El conde del Villar no se amilana, por el contrario, pone en evidencia al inquisidor Antonio Gutiérrez de Ulloa, indicándole al rey sobre las graves acusaciones que caen sobre el inquisidor, todas relativas cómo interfiere a asuntos fuera de su jurisdicción, actuando de forma amenazante y tomando ventaja de su condición de sacerdote y autoridad inquisitorial (Levillier 1921-1926, vol.

---

17 AGI, Patronato, 239, R. 24, f. 3.

11: 6). Estas acusaciones ya habían llegado a oídos del rey, quien finalmente decide nombrar hacia finales de 1586 al licenciado Juan Ruiz de Prado como visitador de la Inquisición de Lima.

En esa misma dirección, ante la inminente posibilidad de una crisis política generada por el enfrentamiento entre virrey e inquisidor, el 20 de enero de 1587 Felipe II llama al orden a la inquisición:

[...] y no es justo que inquietéis por causas de poca importancia a los que me están sirviendo [...] os encargo que advirtáis y considereys mucho vuestras determinaciones como lo requiere vuestro ministerio y guarde yo precisamente la dicha concordia porque así conviene al bueno y recto exercicio de vuestros oficios y administración de justicia.<sup>18</sup>

Ruiz de Prado llega a Lima en febrero de 1587 y de inmediato asume sus funciones no solo como visitador de la inquisición, sino como un inquisidor más. Es así que a las tensiones entre el virrey y el inquisidor Gutiérrez Ulloa se sumaron los conflictos entre el virrey y el inquisidor visitador Ruiz de Prado. Más allá de toda rivalidad que pudiera existir entre Gutiérrez de Ulloa y Ruiz de Prado, éste último hizo cuerpo con su institución, defendiendo su honor, prestigio y prerrogativas frente a las intenciones del virrey (Medina 1956 [1887]: 241-261).

Resulta interesante ver que gran parte de los conflictos no solo se sucedieron de forma rápida, sino que se hicieron visibles en torno a temas jurisdiccionales así como en relación a cuestiones de protocolo y ceremonial. A lo largo de todo el año de 1587 a los conflictos de preeminencia en temas relativos a prerrogativas y jurisdicciones sobre prisioneros ingleses capturados en Paita, el desacato por parte de la Inquisición de respetar las órdenes del virrey en torno a la movilización militar de la población para la defensa del Callao ante la amenaza de piratas, se van sumando no solo venganzas en relación a la cancelación por parte del virrey de nombramientos a la compañía de lanzas a familiares de la Inquisición, o persecuciones contra sacerdotes vinculados a la inquisición y al propio Ruiz de Prado, sino también aquellos de tipo ceremonial y de protocolo.<sup>19</sup> El 30 de noviembre de 1587, en el auto de fe de San Andrés, el inquisidor y visitador Ruíz de Prada decide no darle al virrey el lugar de preeminencia que hasta ese

18 AGI, Lima, L. 15, N. 1, f. 6v.

19 AHN, Inquisición, 1652, Exp. 15, L. 1, ff. 3-6v; AGI Escribanía, 499A, ff. 14v y siguientes.

momento su figura había tenido en los autos de fe anteriores, en la medida que, según el inquisidor, violaba el protocolo establecido en la península. El virrey, reunido en Acuerdo Real, y con apoyo de sus colaboradores, decide ir a la ceremonia, pero de forma individual, sin corte, como forma de hacer pública y visible su molestia frente a la Inquisición.<sup>20</sup>

La disputa con la Inquisición pone al virrey conde del Villar en una posición delicada. Los enfrentamientos directos no solo involucraban a ambas autoridades, sino también al entorno clientelar que cada una de ellas había construido en torno a sí mismas y en relación a una con la otra. Tanto el virrey como el inquisidor hicieron uso de sus armas, y en el caso de Ruíz de Prado un recurso al que apeló cada vez con más frecuencia hacia fines de 1587 fue el de la excomunión, comunicándoselo inclusive a Felipe II en una carta fechada 2 de noviembre de 1587, en la que indica que “y si en esto con lo demás y el cuidado que ponen el [virrey] y los de su casa en desautorizar las cosas que tocan a este Santo Oficio [...] es impedir el recto y libre ejercicio del, directo o indirecto Vuestra Señoría lo vera que aquí por descomulgado lo tenemos llanamente y esto esta bien claro”.<sup>21</sup>

El conflicto entre la inquisición y el virrey, lejos de haberse resuelto con la llegada de Ruiz de Prada, se había vuelto inmanejable hacia inicios de 1588. La autoridad del virrey se había visto dañada severamente frente a las amenazas de excomunión, y empezaba a cuestionarse aspectos propios de su desempeño como autoridad y el otorgamiento de mercedes y puestos reales, allí donde antes no se había dado ninguna crítica. Lo que hasta entonces se percibía como prácticas clientelares propias a su condición de virrey, ahora aparecían como actos ilegítimos y sujetos a denuncia. El detonante se da en marzo de 1588, cuando se hacen públicas unas acusaciones anónimas bajo la forma de un libelo colocado en una de las esquinas de la Plaza Mayor de Lima, en donde se acusaba a los miembros más cercanos de su entorno, su hijo Jerónimo de Torres y Portugal, su sobrino Diego de Portugal, y a su secretario Juan Bello, de haber construido una red en el otorgamiento de favores y mercedes a cambio de dádivas. El libelo iba acompañado de una carta dirigida al virrey, con tantos detalles que éste de inmediato nombró al licenciado Esteban Maraón, miembro de la Au-

---

20 AHN, Inquisición, 1652, Exp. 15, L. 1, f. 1-1v. y AGI Escibanía, 499A 1 documento de 1587, sin fecha específica, ff. 56v-60.

21 AHN, Inquisición, 1652, Exp. 15, L. 1, f. 3v.

diencia de Lima, para que lleve a cabo las investigaciones del caso.<sup>22</sup> El propio virrey, el 15 de abril de 1588 dirige una carta a Felipe II anunciándole los hechos:

Es tanta la disolución que en esta materia tan perniciosa halle en esta tierra de dar dadivas los pretendientes a los que les parece o imaginan que son alguna parte para ayudarle a conseguir sus pretensiones que aunque entre en este Reyno dicieno en publico y en secreto y haciendo a mi confesor que predicase en los pulpitos que nadie lo había de ser conmigo sino la Justicia y Raçon y que no me tratasen de intercesiones que no las quería oyr sino veer sus papeles y dara a cada uno lo que conforme a ellos fuese suio y que entendiesen que hijo ni criado ni ministro mio me había de tratar de negocios ni yo se lo avia de consentir [...] y que eligi criados y ministros d quien se podía tener gran satisfacion me los an conquistado de manera de que a no tener ellos mucha entereça los ubieran pervertido a todos y al fin lo hicieron a uno de quien nunca yo creyera que tal lo avia de suceder que fue Juan Bello. (Levillier 1921-1926, vol. 11: 79)

Las acusaciones contra Bello se remontaban hasta 1586, e involucraban a personas notables como Juan Vargas, yerno del licenciado Juan Baptista de Monzón, oidor de Lima, así como Diego de Salinas. El virrey actuó de inmediato, tomando preso a Juan Bello y nombrando una comisión investigadora de diez personas (cinco de las cuales eran parientes o muy allegado al virrey), presidida por el licenciado Maraón. Sin embargo, el daño estaba hecho y la legitimidad de la autoridad del virrey estaba en cuestionamiento, y sus actos puestos en duda. La inquisición no deja pasar la oportunidad, y pese a que el conde del Villar envía una carta conciliadora a Ruiz de Prado el 4 de abril de 1588, la respuesta del inquisidor es recriminatoria, indicando que frente a los rumores de excomunión que se escuchaban en relación al virrey, éste no debería sentirse ofendido “antes me lo avia de agradecer el dicho señor visorrey pues por este camino ha venido a su noticia y a llegado a entender el peligro a que se ponen las personas que tratan de semejantes cosas sin que ninguna se eçeptue de lo sussodicho”.<sup>23</sup>

Mientras virrey e inquisición continuaban con sus disputas, el licenciado Maraón, como parte de su investigación, había interrogado a setenta testigos, entre miembros de la audiencia de Lima, cabildo, oficiales, comerciantes, vecinos de Lima, Arequipa, Huamanga y La Plata. El re-

<sup>22</sup> AGI, Contratación, 725, N. 32, ff. 10-13.

<sup>23</sup> AGI, Escribanía, 499A, ff. 117-118.

sultado al que llega hacia el 22 de abril de 1588 señala claramente que la responsabilidad recae en Juan Bello, Secretario de la Corte, cabeza de esa red de cohechos y prebendas que funcionaba a nivel de todo el virreinato, secundado por Pedro Fajardo, contador miembro de la corte del virrey conde del Villar. Don Jerónimo y don Diego son declarados inocentes de toda responsabilidad.<sup>24</sup> Más allá de ese resultado, que claramente encubría lo que más adelante se llegaría a saber a través de la visita que Felipe II mandaría realizar a la Audiencia de Lima y del virrey conde del Villar en octubre de 1588, lo interesante de la investigación del licenciado Maraón es los detalles sobre cómo se llevaban las prebendas, el tipo de pago que se recibía (dinero, caballos), cómo se disfrazaba el intercambio de mercedes por beneficios económicos a través de préstamos de pago a muy largo plazo, para ser usados en negocios en Tierra Firme y España.

Lo que vino luego fueron una serie de hechos de conflicto y mutuas acusaciones de liderar redes de prebenda y cohecho, que tuvo como puntos álgidos el secuestro llevado a cabo por la inquisición de Juan Bello, quien se encontraba bajo prisión en las cárceles reales. Aduciendo la existencia de una causa previa contra Bello en el Santo Oficio en relación a acusaciones que lo tildaban como judío, y teniendo como intención real obtener información de primera mano sobre hasta qué punto la red de cohechos solo involucraba a Bello, o si también eran parte de ellas don Jerónimo y don Diego, la Inquisición pone a Bello bajo su jurisdicción e inicia un interrogatorio que resultó infructuoso. Mientras tanto el virrey lleva a cabo investigaciones que ponen al descubierto redes de prebenda en las que la participación de Antonio Gutiérrez de Ulloa y su hermano el inquisidor Manuel Gutiérrez de Ulloa eran notorias y principales, en torno a la creación de una sociedad que diera dinero al rey para la obtención de la adjudicación de minas en el enclave de Huancavelica. En dicha red se encontraban grandes personalidades limeñas, como Gaspar Solís, tesorero de la Real Casa de la Moneda de Lima; Juan Martínez Rengifo, abogado de la Audiencia de Lima y yerno del oidor Ramírez de Cartagena; Diego Gil de Ave, depositario general y regidor del cabildo de Lima; y Diego Núñez de Figueroa, regidor del cabildo de Lima.<sup>25</sup>

Redes clientelares y de patronazgo quedaban al descubierto en ambos lados enfrentados, y aún había más. Los documentos y acusaciones hablan

---

<sup>24</sup> AGI, Justicia, 481, L. 1, ff. 10436-10527.

<sup>25</sup> AGI, Lima, 129, f. 5.



de cohechos, prebendas, disolución, materia tan perniciosa, intercesiones, no tener entereza, ser pervertido. Prácticas conocidas por todos, en las que todos participaban, de un momento a otro se habían vuelto razón de escándalo y delito.

El virrey conde del Villar ordena la prisión y tortura de Diego de Salinas el 31 de enero de 1589, criollo, abogado y familiar de la inquisición. Desde las primeras investigaciones contra Bello se había obtenido información que Salinas era parte de la red de prebendas en calidad de socio de Bello. Ante la presión de la inquisición el virrey ordena la excarcelación de Salinas el 3 de febrero, después de lo cual Salinas permanece en libertad y como persona muy cercana a Ruiz de Prado, hasta 1594, cuando el inquisidor visitador abandona Lima y el inquisidor Gutiérrez de Ulloa lo retira del cargo de abogado.<sup>26</sup>

En medio de la crisis política que lo enfrentaba a la inquisición, y puesta de manifiesto la red clientelar asociada a su gobierno, el 9 de abril de 1589, el conde del Villar comunica a Felipe II la concesión de media encomienda en Huarina (Cuzco) por dos generaciones a Francisco de Torres y Portugal, su nieto, hijo ilegítimo de su hijo Diego de Carvajal, que murió luchando por el rey en las Guerras de Flandes (Levillier 1921-1926, vol. 11: 277). Parecía un acto natural, que no envolvía ninguna intención equivocada ni cuestionable. No hubo respuesta del rey.

La Inquisición reacciona contra los actos cometidos contra Salinas, convoca a una comisión investigadora a fin de hallar a los culpables del delito de tortura. La primera persona en ser condenada es el licenciado Valdelomar, lugarteniente de corregidor directamente responsable por la tortura, sentenciado a vivir 20 años en destierro a veinte leguas de Lima. El siguiente en ser hallado responsable es el virrey conde del Villar, a quien se le excomulga en octubre de 1589. Pese a que pocos días más tarde, y gracias a la intervención de fray Pedro de Molina, franciscano, la Inquisición accede a levantar la excomunión (Holguín Callo 2002: 124-125). Cuestionado, deshonrado y excomulgado por la Inquisición, comprometido en una red de prebendas asociados a miembros de su casa, difamado públicamente por Diego de Salinas y otras personas notables de la ciudad, hacia fines de 1589 la autoridad y legitimidad de Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar, virrey del Perú y señor del Villardompardo había sido golpeada severamente. Junto a ella, las redes clientelares y de patronazgo de ambos

---

26 AGI, Escribanía, 567A, f. 3.

bandos, virrey e inquisición habían quedado expuestas, pero el destino de ambas no sería el mismo.

La excomunión del virrey conde del Villar fue la primera dada a un virrey en América. En el futuro, solo habría una ocasión más en que una situación similar volvería a darse, cuando Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, Marqués de Gelves, antiguo asistente de Sevilla, y virrey de Nueva España entre 1621-1625, resultara excomulgado por el arzobispo de la Ciudad de México en enero de 1624.<sup>27</sup>

Era evidente que la situación en el Perú se había escapado de control, y se tenía un escenario en donde las principales autoridades coloniales se encontraban abiertamente enfrentadas y sus redes clientelares expuestas. Un año antes a la excomunión del virrey conde del Villar, el 18 de octubre de 1588, Felipe II nombra al licenciado Alonso Fernández de Bonilla, letrado en cánones y leyes en Salamanca, abogado, sacerdote e inquisidor permanente de la Ciudad de México como visitador de la audiencia de Lima y del virrey conde del Villar.<sup>28</sup> Menos de un mes después, hacia el 10 de noviembre de 1588 Felipe II escribe una carta al conde del Villar anunciándole que acepta el pedido que éste le había hecho reiteradamente de ser relevado de su cargo como virrey, ya que “habiendo visto lo que muchas veces me haveys escripto cerca de la continuación de vuestras yndisposiciones y el aprieto en que atenúan y el riesgo que podía tener en vuestra salud [...] y porque mediante lo referido he proveído vuestro lugar a don Garçia de Mendoça, llegado que sea a esos reynos os esforçareys para venir a estos a descansar”.<sup>29</sup>

El conde del Villar recién esta noticia en julio de 1589, poco antes de su excomunión, y anuncia que esperará al nuevo virrey, luego de lo cual regresará a España. Cuando el 6 de enero de 1590 el nuevo virrey entra a Lima, el conde del Villar y su hijo Jerónimo forman parte de la corte de entrada, ocupando un lugar principal. El 2 de mayo de 1590 el conde del Villar parte del Callao, junto con su hijo Jerónimo y sirvientes de su entorno. El licenciado Bonilla, su visitador, llega al Callao el 2 de agosto de 1590, tres meses luego de la partida del conde del Villar a España. El

27 Sobre el particular, revisar el trabajo clásico de Richard Everett Boyer (1982) “Absolutism vs Corporatism in New Spain: the administration of the marques of Gelves, 1621-1624”; así como la más reciente tesis de Gibrán Irving Israel Bautista y Lugo (2014) *Castigar o perdonar El gobierno de Felipe IV ante la rebelión de 1624 en México*.

28 AGI, Justicia, 480, L. 1, f. s/n.

29 AGI, Lima, 570, L. 15, N. 1, f. 18v.

proceso interrogatorio a testigos y recolección de documentos a lo largo de todo el virreinato fue del 2 de noviembre de 1590 al 17 de agosto de 1592. Abarca temas administrativos y fiscales, así como aspectos del comportamiento personal del virrey y de su entorno cercano, y las relaciones con otros poderes políticos y personalidades locales en general. Las pesquisas ponen al descubierto lo siguiente:

- a) La compleja red patronazgo construida por el virrey conde del Villar, en sus diferentes niveles y campos de acción, favoreciendo constantemente a un grupo bien identificado de personajes: Francisco de Quiñones, doctor Alberto de Acuña, doctor Pedro Muñiz, doctor Esteban Maraño, fray Pedro de Molina.<sup>30</sup> Dentro del grupo de favorecidos se contaban a los propios miembros de la Audiencia de Lima, cuyos familiares recibieron del conde del Villar provisiones tales como corregimientos y puestos públicos (justicias mayor).<sup>31</sup>
- b) El manejo personal, autoritario y señorial del conde del Villar: manda a prisión a oficiales públicos como el caso del tesorero real, Antonio Dávalos, debido a un intercambio de palabras, o Francisco Manrique, Factor real, quien fue maltratado y ridiculizado en público en las sesiones del Acuerdo General.<sup>32</sup> De igual manera hay quejas de malos tratos a solicitantes, levantando rumores en contra de su autoridad como virrey.<sup>33</sup>

30 AGI, Justicia, 480, f. 212v.

31 AGI, Justicia, 480, L. 1, f. 191-191v. testimonio dado por Juan Martínez Rengifo, en donde directamente indica al oidor Ramírez Cartagena (posteriormente muy crítico del conde del Villar) como beneficiado a través de un pariente suyo, Lic. Castañeda, quien recibió el corregimiento de Huaylas. Lo mismo en el caso del oidor Artiga, cuyo sobrino Juan de Olazábal recibió un corregimiento de indios.

AGI, Justicia, 480, f. 138v. Oidor Ramírez Cartagena no menciona lo del Lic. Castañeda, pero sí reconoce que algunos parientes suyos recibieron corregimientos en Cajamarca, Cabana, Arequipa, así como cargos como alférez mayor de Lima, etc.

32 AGI, Justicia, 480, f. 125. Testimonio dado por el Lic. Cristóbal Ramírez de Cartagena, oidor más antiguo de la Audiencia de Lima.

AGI, Justicia, 480, ff. 340v-341. Testimonio dado Tristán Sánchez, Contador Real.

33 AGI, Justicia, 480, L. 1, f. 518v. Testimonio en donde fray Juan de Vega, Guardián del Convento de San Francisco de Lima y provincial de dicha orden, narra situaciones de maltrato del virrey hacia diversos solicitantes.

AGI, Justicia, 480, L. 1, f. 443. Testimonio de Juan de Sotomayor, personaje que recibió privilegios para explotación minera de manos del conde del Villar en muchas ocasiones, indica la actitud displicente del virrey en especial a quienes iban a hacer

- c) Subvertir el orden político y las dinámicas de poder, al tener como asesores a personas de su entorno, al intervenir en instituciones sin respetar las instancias y autoridades (Cabildo, Universidad), “*por convertir el gobierno de la çibdad en sus intereses y por aver en su eleçion muchas parcialidades y pendençias*”.<sup>34</sup>

En 1593, el visitador Fernández de Bonilla declaró al conde del Villar culpable de 108 cargos, incluidas acusaciones de favoritismo y prebenda. Desafortunadamente, no he podido encontrar los descargos presentados por los representantes del virrey, quien había muerto en Sevilla el 15 de octubre de 1592. Tampoco hay evidencia directa de la actitud de la Corona en relación al virrey y a sus familiares envueltos en estas acusaciones. Solo se tiene información referencial sobre el destino de estos personajes.

Don Jerónimo de Torres y Portugal, acusado en la visita de ser responsable de recibir dinero y bienes a cambio de interceder en el otorgamiento de mercedes y beneficios reales gracias a su cercanía a su padre el virrey, no recibió ningún castigo. Por el contrario, a su regreso a España continuó una muy exitosa carrera como miembro de la Real Armada Española, siendo beneficiado con numerosas mercedes reales debido a los méritos de su padre y a los suyos propios.<sup>35</sup> En los años 1603, 1606, 1608, 1609, 1611 y 1613 fue general de la Armada de Tierra Firme.<sup>36</sup> Hacia 1613, poseedor de una enorme fortuna y de mayorazgo propio, se retiró a vivir en la ciudad de Granada, siendo considerado vecino principal. En 1615 su nombre fue considerado entre los posibles candidatos para reemplazar a don Juan de Mendoza y Luna, Marqués de Montesclaros, en el puesto de virrey del Perú (Schäfer 1947: 29).

Don Diego de Portugal, sobrino y colaborador cercano del virrey conde del Villar, acusado de colaborar en los actos de prebenda, no recibió ninguna sentencia y permaneció en el Perú como representante de los asuntos del conde del Villar en el Perú. En reconocimiento a sus labores diversas en favor de la Corona, don Diego fue nombrado corregidor de

---

peticiones muchas veces seguidas, o el error de rodearse a asesores que conocen poco de la realidad local y aíslan al virrey de todo contacto con la gente.

34 AGI, Justicia, 480, f. 213. Testimonio de Francisco Quiñones, quien había sido nombrado Corregidor de Lima por el conde del Villar, como resultado de la decisión del virrey de anular las elecciones para miembros del cabildo de Lima.

35 AGI, Patronato, 190, R. 43, ff. 1-4.

36 AGI, Contaduría, 2976, f. s/n.

Quito y posteriormente de Charcas, así como Alcalde Ordinario de Lima. En 1610, debido a su impecable hoja de servicios al rey, fue nombrado oidor y presidente de la Audiencia de Charcas.<sup>37</sup>

El gobierno de Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar, señor del Villardompardo y caballero de la Orden de Santiago, virrey del Perú representa una oportunidad particularmente interesante para analizar los mecanismos políticos y dinámicas patrimoniales, de patronazgo y clientelares propias de un modelo colonial construido a semejanza de Castilla. Más aún, las características de la crisis de poder y legitimidad en relación a la autoridad del virrey justamente reflejan las peculiaridades de los conflictos políticos en sistemas tradicionales y patrimoniales en donde los mecanismos de poder y alianzas entre los distintos grupos de poder funcionan como sólidas estructuras de gobierno, pero al mismo tiempo frágiles en la medida que los balances no se mantienen ni reinventan. La disputa entre el virrey conde del Villar y la Inquisición y las acusaciones posteriores contra el virrey responden justamente a una ilegitimidad que no nace necesariamente de acciones que hoy en día podríamos considerar como corruptas, sino de una pérdida de legitimidad en donde los actos de la autoridad pierden todo reconocimiento y aceptación. La particular intervención de la Corona, en donde más allá de enviar un visitador y llegar a cabo investigaciones burocráticas, no termina de sancionar a ninguno de los participantes directos del conflicto, sino todo lo contrario, refleja justamente la validez de principios clientelares y de patronazgo, que estaban a la base del funcionamiento del Estado patrimonial colonial en el siglo xvi.

---

37 AGI, Charcas, 18, R. 7, N. 121/1, f. 1.

## **Bibliografía**

### **Fuentes de archivo:**

Archivo General de Indias - Sevilla (AGI)

Secciones: Contaduría 2976.

Contratación 725 y 5229.

Charcas 18.

Escribanía 499A, 500A y 567A.

Indiferente 606, 740 y 742.

Justicia 480-485.

Lima 1, 29, 32, 93, 108, 127, 129, 209, 217, 274, 318 y 570.

Pasajeros 10.

Patronato 190, 227, 239 y 258.

Quito 8, 9 y 25.

Archivo Histórico Nacional - Madrid (AHN)

Secciones: OM-Caballeros-Santiago, Exp. 8167 y 8170.

Inquisición 1035 y 1652.

Archivo Histórico Provincial de Jaén

Secciones: Legajos varios II, años 1585-1595.

Biblioteca Nacional - Madrid (BNM)

Manuscritos: 2058, 2835, 3043, 3044 y 9372.

Biblioteca Nacional - Lima

Secciones: Siglo XVI

Legajos varios

Biblioteca de la Universidad de Sevilla

Manuscrito: Tomo 4, Documento 17.

### **Fuentes primarias impresas:**

CARTAS DE CABILDOS HISPANOAMERICANOS. AUDIENCIA DE LIMA (1999). 5 vols. Edición, introducción e índices de Javier Ortiz de la Tabla Duchase, M<sup>a</sup>. Jesús Álvarez, and Águeda Rivera Garrido. Sevilla/Lima: Escuela de Estudios Hispano-Americanos/Instituto Riva-Agüero.

CARTAS DE CABILDOS HISPANOAMERICANOS. AUDIENCIA DE LIMA (2000). 2 vols. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos.

COLECCIÓN DE LAS MEMORIAS O RELACIONES QUE ESCRIBIERON LOS VIRREYES DEL PERÚ ACERCA DEL ESTADO EN QUE DEJABAN LAS COSAS GENERALES DEL REINO (1921). 5 vols. Madrid: sin editorial.

- ENCINAS, Diego de (1945 [1596]): *Cedulario indiano*. Reproducción facsímil. 4 vols. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica.
- HANKE, Lewis (1978-1980): *Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria. Perú*. 7 vols. Madrid: Atlas.
- JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Marco (1965 [1885]): *Relaciones Geográficas de Indias*. 3 vols. Madrid: Atlas.
- KONETZKE, Richard (1953): *Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, 1493-1810*. 3 vols., 5 tomos. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- LEVILLIER, Roberto (1921-1926): *Gobernantes del Perú: Cartas y papeles del siglo XVI*. 14 vols. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra.
- LIBROS DE CABILDOS DE LIMA (1942). Descifrados y anotados por don Juan Bromley. 18 vols. Lima: Torres Aguirre.
- MARTÍNEZ DE MAZAS, José (1978 [1794]): *Retrato al natural de la ciudad y termino de Jaén: Su estado antiguo y moderno, con demostración de quanto necesita mejorarse su poblacion, agricultura y comercio*. Barcelona: Ediciones El Albir.
- MÉNDEZ SILVA, Rodrigo (1646): *Memorial de las Casas del Villar Don Pardo y Cañete*. Madrid: sin editorial.

#### Fuentes secundarias:

- ANDRIEN, Kenneth J. (1984): "Corruption, Inefficiency, and Imperial Decline in Seventeenth-Century Viceroyalty of Peru". En: *The Americas* 41, 1, pp. 1-20.
- (1985): *Crisis and Decline: The Viceroyalty of Peru in the Seventeenth Century*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- BAUTISTA Y LUGO, Gibran Irving Israel (2014): "Castigar o perdonar. El gobierno de Felipe IV ante la rebelión de 1624 en México". Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México (Facultad de Filosofía y Letras).
- BERTRAND, Michel (2011): *Grandeza y miseria del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos XVII y XVIII*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- BOYER, Richard Everett (1982): "Absolutism vs. Corporatism in New Spain: the Administration of the marqués of Gelves, 1621-1624". En: *International History Review* 4, 4, pp. 475-503.
- BURKHOLDER, Mark A./CHANDLER, Douglas S. (1977): *From Impotence to Authority: The Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808*. Columbia: University of Missouri Press.
- CAÑEQUE, Alejandro (2004): *The King's Living Image. The Culture and Politics of Viceregal Power in Colonial Mexico*. New York: Routledge.
- DOMÍNGUEZ DE ORTIZ, Antonio (1946): "Salarios y atribuciones de los asistentes de Sevilla". En: *Archivo Hispalense* 7, 20, pp. 207-213.
- ESCANDELL Y BONET, Bartolomé (1980): "Una lectura psico-social de los papeles del Santo Oficio: Inquisición y sociedad peruana en el siglo XVI". En: Pérez Villanueva, Joaquín (ed.): *La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes*. Madrid: Siglo XXI, pp. 437-467.

- FRIEDRICH, Carl J. (2002 [2000]): "Corruption Concepts in Historical Perspective". En: Heidenheimer, Arnold J./Johnston, Michael (eds.): *Political Corruption. Concepts and Contexts*. New Brunswick/London: Transaction Publishers, pp. 15-23.
- GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Luis (1982): *Curso de historia de las instituciones españolas: de los orígenes al final de la Edad Media*. Madrid: Alianza Editorial.
- GARCÍA GALLO, Alfonso (1944): *Los orígenes de la administración territorial de las Indias*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- GÉNAUX, Maryvonne (2002 [2000]): "Early Modern Corruption in English and French Fields of Vision". En: Heidenheimer, Arnold J./Johnston, Michael (eds.): *Political Corruption. Concepts and Contexts*. New Brunswick/London: Transaction Publishers, pp. 102-121.
- GÓNGORA, Mario (1951): *El Estado en el derecho indiano. Época de fundación (1492-1570)*. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
- HAMPE MARTÍNEZ, Teodoro (1992): "Esbozo de una transparencia política: asistentes de Sevilla en el gobierno virreinal de México y Perú". En: Sarabia Viejo, María Justina (ed.): *Europa e Iberoamérica: cinco siglos de intercambios*. Sevilla: Asociación de Historiadores Latinoamericanos Europeos, pp. 5-26.
- HERZOG, Tamar (1995): *La administración como un fenómeno social: la justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750)*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- (2004): *Upholding Justice. Society, State, and the Penal System in Quito (1650-1750)*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- HOLGUÍN CALLO, Oswaldo (2002): *Poder, corrupción y tortura en el Perú de Felipe II: El Doctor Diego de Salinas (1558-1595)*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- KAMEN, Henry (1991): *Spain 1469-1714. A Society of Conflict*. New York: Longman.
- LATASA VASALLO, Pilar (1997): *Administración virreinal en el Perú: gobierno del Marqués de Montesclaros (1607-1615)*. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
- MACKEY, Angus (1977): *Spain in the Middle Ages. From Frontier to Empire, 1000-1500*. New York: St. Martin's Press.
- MANN, Michael (1984): "Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and results". En: *Archives Européennes de Sociologie* 25, pp. 185-213.
- (2012 [1986]): *The Sources of Social Power*. 4 vols. Cambridge: Cambridge University Press.
- MARAVALL, José Antonio (1986 [1972]): *Estado Moderno y mentalidad social (siglos xv a xvii)*. 2 vols. Madrid: Alianza Editorial.
- MARTIN, Cheryl English (1996): *Governance and Society in Colonial Mexico. Chihuahua in the Eighteenth Century*. Stanford: Stanford University Press.
- MEDINA, José Toribio (1956 [1887]): *Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima (1569-1820)*. 2 tomos. Santiago de Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico J.T. Medina.
- MOLINA MARTÍNEZ, Miguel (1983): "Los Torres y Portugal. Del señorío de Jaén al Virreinato peruano". En: *Andalucía y América en el siglo xvi. Actas de las II jornadas de Andalucía y América (Universidad de Santa María de la Rabia, marzo 1982)*. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, pp. 35-66.
- MONTOTO, Santiago (2001): *Sevilla en el Imperio*. Sevilla: Ediciones Libanó.



- MORALES PADRÓN, FRANCISCO (1989): *Historia de Sevilla. La ciudad del quinientos*. 3ª ed. revisada. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- MORENO CEBRIÁN, ALFREDO/SALA I VILA, NÚRIA (2005): "Una aproximación a la corrupción política virreinal. La confusión entre lo público y lo privado en el Perú de Felipe V". En: *Histórica* XXIX, 1, pp. 69-105.
- PIETSCHMANN, HORST (1980): *El Estado y su evolución al principio de la colonización española en América*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- (1982): "Burocracia y corrupción en Hispanoamérica colonial". En: *Nova Americana* 5, pp. 11-37.
- (1998): "Corrupción en las Indias españolas: Revisión de un debate en la historiografía sobre Hispanoamérica colonial". En: González Jiménez, Manuel/Pietschmann, Horst/Comín, Francisco/Pérez, Joseph (eds.): *Instituciones y corrupción en la historia*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, pp. 31-52.
- PORTOCARRERO, FELIPE (ed.) (2005): *El Pacto Infame: Estudios sobre la corrupción en el Perú*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
- PIKE, FREDERICK (1958): "The Municipality and the System of Checks and Balances in the Spanish American Colonial System". En: *The Americas* 15, 2, pp. 139-158.
- PUENTE BRUNKE, JOSÉ DE LA (2006): "Codicia y bien público: los ministros de la Audiencia en la Lima seiscientista". En: *Revista de Indias* LXVI, 236, pp. 133-148.
- QUIROZ, ALFONSO W. (2013): *Historia de la corrupción en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- RAMOS, FRANCES L. (2012): *Identity, Ritual, and Power in Colonial Puebla*. Tucson: University of Arizona Press.
- RHEINSTEIN, MAX (ed.) (1969): *Max Weber on Law in Economy and Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ROSENMÜLLER, CHRISTOPH (2008): *Patrons, Partisans, and Palace Intrigues. The Court Society of Colonial Mexico, 1702-1710*. Calgary: University of Calgary Press.
- SARFATTI, MAGALI (1966): *Spanish Bureaucratic-Patrimonialism in America*. Berkeley: Institute of International Studies University of Berkeley.
- SCHÄFER, ERNST (1947): *El Consejo Real y Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria*. Vol. 7. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
- SCHWARTZ, STUART B. (1970): "Magistracy and Society in Colonial Brazil". En: *The Hispanic American Historical Review* 50, 4, pp. 715-730.
- TORRES ARANCIVIA, EDUARDO (2006): *Corte de virreyes. El entorno del poder en el Perú del siglo XVII*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- WAQUET, JEAN-CLAUDE (1991): *Corruption. Ethic and Power in Florence, 1600-1700*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- WEBER, MAX (2005 [1922]): *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.